

ECONOMÍA / POLÍTICA

Así es la lluvia de impuestos que viene

'PLAN MARSHALL' La Comisión quiere que el presupuesto comunitario juegue un papel crucial en el plan de reconstrucción de la sus recursos propios para ayudar a financiar los nuevos instrumentos. Planea un abanico de impuestos que afectarán

J.Díaz. Madrid

Europa ya resurgió una vez de sus cenizas tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy necesita reconstruirse de nuevo ante el efecto devastador del coronavirus. Ante la magnitud de la catástrofe, la respuesta del bloque comunitario ha sido poner encima de la mesa un histórico plan de recuperación que entre el bazuca del BCE, que suma 1,35 billones de euros hasta la fecha, y las distintas iniciativas de Bruselas (los fondos de recuperación y de rescate, el programa de ayuda para los ERTE y los préstamos del BEI, que aglutinan en conjunto 1,29 billones) alcanza una cifra sin parangón: más de 2,6 billones de euros. Un esfuerzo titánico al que, si se añade el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que Bruselas quiere reforzar hasta los 1,1 billones de euros, eleva la potencia de fuego europea por encima de los 3,7 billones.

Pero toda moneda tiene dos caras y el reverso de este ingente esfuerzo para renacer de entre los escombros del Covid-19, propuesta a la que se ha llegado no sin dificultades y que aún debe superar el filtro de unos socios divididos y en muchos casos reacios a que parte de las ayudas sean transferencias y no créditos, como evidenció la cumbre virtual de líderes europeos celebrada el pasado viernes, son unas necesidades de financiación también sin precedentes.

El grueso se financiará mediante la emisión de deuda a largo plazo (por primera vez en la historia de la UE, se emitirán títulos supranacionales), pero como señaló recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el presupuesto comunitario deberá jugar también un "papel crucial" para movilizar los recursos necesarios. Unos recursos que Bruselas no buscará debajo de las piedras, sino en parte en el bolsillo de las empresas europeas y, por extensión, de los ciudadanos de la UE, en los que de un modo u otro repercutirá la batería de impuestos que proyecta el Ejecutivo comunitario. Una andanada fiscal con la que la Comisión Europea pretende cosechar nuevos recursos propios con los que "ayudar a financiar" el fondo de recuperación poscoronavirus, tanto

en lo que se refiere al reembolso de la deuda, la primera mutualizada de la UE, como al pago de intereses.

Von der Leyen, que llegó a la presidencia de la Comisión Europea con unos apoyos muy ajustados y que ha reivindicado su mandato asumiendo un rol muy activo en la respuesta a la crisis del Covid-19, ha revestido con un barniz *verde* y solidario su propósito de flexibilizar el margen de maniobra de un presupuesto comunitario hasta ahora muy encorsetado para hacerlo más asimilable para los Estados miembros. De hecho, buena parte de las figuras impositivas planteadas hasta la fecha están vinculadas a la obtención de unos "recursos propios verdes" que, además de contribuir al "esfuerzo de recuperación", apoyen "la transición verde de la economía y la sociedad europeas". Esta es la lluvia fiscal que prepara Bruselas:

Ampliación del comercio de emisiones

Los Estados de la UE ingresaron unos 13.600 millones de euros en 2018 por la subasta de los derechos de emisión de CO₂, 8.000 millones más que el año anterior como consecuencia del alza del precio del carbono. El Ejecutivo comunitario ha puesto encima de la mesa modificaciones importantes en el sistema de comercio de emisiones. Plantea que los países del bloque mantengan ingresos similares a los que ya obtienen por este concepto pero fijando un techo a partir del cual los recursos excedentes vayan a parar a las arcas del presupuesto de la UE. En concreto, sopesa extender este sistema, que en la actualidad afecta esencialmente a las áreas industriales y de generación eléctrica, a los sectores marítimo y aéreo. Según los cálculos de Bruselas, esta medida podría reportar unos ingresos de alrededor de 10.000 millones de euros al presupuesto comunitario, dependiendo del precio del carbono y de su introducción en nuevos sectores de actividad.

Impuesto al carbono en frontera

Otra de las medidas que contempla Bruselas es imponer



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El hachazo nacional

Las empresas y ciudadanos españoles se enfrentarán en muchos casos a un doble mordisco fiscal, ya que a las medidas que proyecta Bruselas se sumará el hachazo impositivo que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no renuncia a su hoja de ruta hacia la convergencia fiscal con Europa; es decir, a una subida generalizada y masiva de impuestos "en el momento adecuado", tal como señaló no hace mucho

la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así, junto al rodillo tributario que avanza desde Bruselas, sobre el contribuyente nacional sobrevuelan muchas otras alzas impositivas: en IRPF, Sociedades; Patrimonio, con especial énfasis en las grandes fortunas, en el diésel... Sin olvidar otras figuras de nuevo cuño, como el gravamen al plástico o las denominadas tasas *Tobin* y *Google*, aunque el futuro de

esta última está en el alero en nuestro país y no solo por las amenazas de EEUU, sino porque se solapa con la intención de la Comisión Europea de homogeneizar este impuesto en la UE y utilizar sus ingresos para nutrir el presupuesto comunitario. En conjunto, la batería fiscal que planea el Gobierno rondaría los 7.600 millones de euros. Alrededor de 2.600 millones provendrían de la Ley contra el Fraude y

las tasas *Tobin* y *Google* (aunque los casi 1.000 millones de ésta se encuentran seriamente en entredicho). De los 5.000 millones restantes, el grueso de la recaudación provendría de Sociedades, con unos ingresos estimados de 3.826 millones. La subida del diésel para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina aportaría otros 670 millones y el alza del IRPF a las rentas altas, 328 millones más.

tasas contra importaciones de productos de países terceros que impliquen generación de carbono, una medida que impactaría de lleno en los productos chinos, pero no solo en ellos: también en los procedentes de países emergentes como Marruecos e India.

El propósito de la Comisión, además de nutrir sus cuentas, es garantizar que las compañías europeas compiten en igualdad de condiciones con empresas extraco-

munitarias de países con estándares medioambientales mucho menos exigentes. Una medida que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lleva meses defendiendo en Bruselas y una vieja reivindicación de sectores como el siderúrgico, que se quejan del coste que supone competir con importaciones procedentes de terceros países donde los fabricantes no cumplen las mismas obligaciones y, por ende, no asumen el coste que

representa. Con este canon, la Comisión estima que se podrían recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros, una amplia horquilla que, según reconoce el propio Ejecutivo comunitario, dependerá del diseño de la tasa y, sobre todo, de su ambición.

Gravamen a los envases de plástico

También bajo el paraguas de la lucha contra el cambio cli-

mático, Bruselas evalúa imponer una tasa a los envases de plástico no reciclables, que han ganado protagonismo entre los consumidores durante las semanas de confinamiento. Aunque Bruselas no ha precisado ahora los cálculos sobre lo que recaudaría con esta medida, es una posibilidad que contempla desde 2018, cuando presentó su primera propuesta para el nuevo marco financiero plurianual para 2021-2027. Entonces, es-